

2 DE DICIEMBRE 2019

## La demanda por el orden

La violencia que ha acompañado las masivas y extendidas movilizaciones sociales, así como la fuerza desproporcionada ejercida por los servicios policiales para preferentemente reprimir las manifestaciones pacíficas antes que los hechos de violencia, y que han dejado un doloroso saldo de más de una veintena de muertos, miles de heridos, más de 220 personas con lesiones graves, apremios y abusos sexuales en contra de detenidos (as), son síntomas de graves patologías que afectan a nuestra sociedad.

Sin lugar a dudas existe una violencia institucional, derivada de un orden político, económico y social, injusto, que segrega, excluye y agravia cotidianamente a los excluidos y marginados. Algunos hablan de 30 años de abusos. Otros lo extienden a 45 y no pocos lo vinculan a nuestra historia, tal como sucede en la mayoría de los países de la región, que mantienen altos índices de desigualdad en la distribución de la riqueza, con serias dificultades para asumir la pluralidad étnica y cultural que marca sus identidades, con sistemas políticos crecientemente incapaces de procesar las nuevas demandas sociales y darles un adecuada cauce institucional.

No es posible interpretar la historia reciente de nuestro país, sin caer en un reduccionismo e ideologismo excesivo, como un continuo de abusos en contra de los sectores más vulnerables, sin reconocer los innegables avances en materia económica, social y política que llevó a muchos analistas internacionales a presentar a Chile como un modelo de estabilidad política, desarrollo económico y paz social.

Pero es más que evidente que tras esa imagen se escondía una realidad bastante menos auspiciosa y auto complaciente. La realidad de un país dual, en donde se han reducido drásticamente los niveles de pobreza, donde los pobres son menos pobres pero los ricos son más ricos, con la emergencia de una clase media vulnerable, amenazada permanentemente con volver a la condición de pobreza por la pérdida del empleo, una enfermedad catastrófica o pensiones miserables.

Todo ello en medio de un proceso de modernización que no todos los sectores pueden costear sin un fuerte endeudamiento. Entre ellas, una salud o educación de calidad, un transporte eficiente, una pensión digna, el sueño de la casa propia y la propia subsistencia. Todo ello sin mencionar el incentivo al consumo desmedido generado por el mercado y la publicidad.

El alza de la tarifa del metro en treinta pesos fue el detonante de las masivas protestas y los hechos de violencia que la acompañaron. Fueron los jóvenes menores de edad quienes

decidieran saltar los torniquetes del metro bajo la consigna de la evasión como una forma de desobediencia civil, los que iniciarán la protesta. Al poco tiempo se iniciaron, de manera coordinada, la quema y destrucción de las estaciones. A esto siguieron los enfrentamientos violentos con servicios policiales, el saqueo de supermercados, la destrucción de la propiedad pública y privada que no tan sólo ha sobrepasado a las fuerzas policiales, sino también al propio gobierno, que ha mostrado confusión y desorientación para enfrentar una de las crisis sociales y políticas más severas que ha enfrentado el país en las últimas décadas, adoptando medidas inconducentes y la mayor de las veces contraproducentes para enfrentar la violencia contestataria, insinuando que el país enfrentaba una guerra en contra de la delincuencia y los violentistas.

Y pese a que el gobierno afirma haber escuchado las demandas ciudadanas y sostiene que distingue claramente las legítimas expresiones de protesta materializadas en multitudinarias manifestaciones de los actos de violencia que a menudo las acompañan, la acción represiva se ha centrado fundamentalmente en reprimir las manifestaciones pacíficas, con un uso desmedido de la fuerza que, en la mayoría de los casos no se atienen a los protocolos establecidos, antes que enfrentar los actos de violencia como los saqueos, incendios y destrucción de la propiedad pública y privada que, en la mayoría de los casos, se cometen con total impunidad y ausencia de fuerzas policiales.

La inmensa mayoría del país aspira a detener el espiral de violencia que hoy se vive. Pero sería muy ilusorio pensar que ello pueda lograrse atacando sus síntomas en base a medidas de fuerza o represión, sin enfrentar sus verdaderas causas de una manera integral.

## **El baile de los que sobran**

La pregunta es quienes son los principales protagonistas de esta violencia contestataria que busca destruir todo aquello que representa al Estado o al mercado, incluidos grandes y pequeños negocios, estaciones de metro, supermercados, señalética y monumentos.

Diversos estudios identifican como los principales protagonistas a jóvenes menores de edad, provenientes de barrios vulnerables, muchos de los cuales han desertado del sistema escolar, no estudian ni trabajan (según algunos investigadores la cifra llegaría a más de 528.000 jóvenes en esa condición). En un porcentaje importante esos jóvenes, que han sido formados en una cultura

de la violencia (institucional, familiar, territorial y social) pertenecen a pandillas juveniles y/o a las llamadas “barras bravas”, con evidentes vinculaciones con el narco tráfico o el crimen organizado. En su gran mayoría viven en territorios dominados por la ley del más fuerte, en donde la violencia y balaceras son pan de cada día.

La inmensa mayoría de estos jóvenes no responden a una ideología política ni se sienten representados por partidos u organizaciones sociales. No están particularmente interesados en un nuevo orden institucional o una agenda social determinada, sino en expresar una ira acumulada por un orden que los excluye. Enfrentar a la “yuta” (la Giusta o la policía), bajo la consigna anarquista de que todos los policías son bastardos (ACAB en sus siglas en ingles), defensores del Estado opresor y de los explotadores.

Sin lugar a dudas, este clima de violencia y descontrol generado por esta violencia contestaría, es aprovechado por bandas criminales y de narcotraficantes para saquear y destruir, en provecho propio o incluso, con la alternativa de distribuir gratuitamente los productos de saqueo entre vecinos como forma de reforzar sus redes de protección.

Un problema no menor en medio de esta crisis social es que estos actos de violencia no sólo tienden a naturalizarse como una respuesta legítima a la violencia institucional y la acción represiva del Estado. No caren de una cierta épica y la potencialidad de devenir en un escenario pre revolucionario, como insinúan algunos sectores que han mostrado más de una ambigüedad a la hora de condenar la violencia y asumir a la democracia como el espacio y límite de la acción política.

## **La democracia amenazada**

Sin lugar a dudas la democracia se encuentra amenazada. En primer lugar por un gobierno extremadamente debilitado, con serias dificultades para asumir la profundidad de la crisis que hoy enfrenta el país y sin la capacidad de liderar soluciones de fondo que permitan enfrentarla en su integralidad.

Por otra parte, por los nostálgicos del autoritarismo, que han buscado interpretar el acuerdo por una nueva constitución como una verdadera “rendición” del gobierno frente a las demandas de la izquierda y el movimiento social, demandando “mano dura” del gobierno para enfrentar la violencia.

Y por diversas expresiones del populismo, de derecha y de izquierda, que no confían plenamente en la democracia como el sistema político que permite dirimir conflictos en base a las reglas de mayorías y minorías.

Es más que evidente que la democracia contiene los elementos y los medios para reponer el orden democrático y abrir los cauces institucionales para procesar las justas demandas ciudadanas y darles respuestas adecuadas.

Pero ello requiere de un ajustado diagnóstico. Chile no está al borde de la guerra civil, como insinúan algunos. Tampoco vive un proceso pre revolucionario ni enfrenta una verdadera crisis institucional, por más que tanto las instituciones como el propio sistema político enfrenten una crisis de legitimidad, confianza y credibilidad.

Chile enfrenta una verdadera crisis social y política que requiere ser enfrentada de manera radical en sus verdaderas causas y orígenes a través de los mecanismos de la democracia. Ha llegado la hora de buscar un nuevo Acuerdo Nacional, Con mayor diálogo social y político. Con voluntad y decisión de buscar consensos amplios y vinculantes entre el gobierno, los diversos poderes del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil, en su más amplia diversidad.

Sin lugar a dudas la crisis actual representa un serio riesgo para nuestro sistema democrático pero también una gran oportunidad para buscar rectificaciones muy de fondo en nuestro sistema político- incluida una nueva constitución democrática en sus orígenes y homogénea en sus contenidos-, así como en el modelo de desarrollo, con una resuelta voluntad de enfrentar las profundas desigualdades e inequidades que marcan a nuestra sociedad.

El histórico acuerdo político en torno a una nueva constitución (incluyendo el plebiscito para decidir si la mayoría del país quiere una nueva constitución y pueda decidir en torno al mecanismo de elaboración), representa un claro avance valorado por la inmensa mayoría del país, como señalan las encuestas. Pero aún debe superar los esfuerzos de sectores de derecha que, por la vía de las llamadas “interpretaciones”, buscan distorsionarlo, así como las reticencias de sectores sociales y políticos que lo asumen como un acuerdo de las elites, al margen del movimiento social.

Evidentemente este acuerdo no basta para superar la crisis social que aún vive el país. Con la misma decisión y sentido de urgencia, el conjunto del país, incluyendo el sistema político y los movimientos sociales deben ser capaces de concordar una robusta agenda de transformaciones políticas, económicas y sociales, que busquen dar respuesta a las principales demandas sociales.

Ello debiera traducirse en un nuevo y ambicioso pacto político, económico y social que comprometa por igual al gobierno y a la oposición, empresarios y trabajadores, partidos y organizaciones sociales.

El país cuenta con los recursos y potencialidades para enfrentar la crisis actual, retomar el orden

democrático y reponer la senda del crecimiento. Evidentemente no en un solo acto sino en un proceso gradual, con medidas inmediatas, de corto y mediano plazo, que requieren del esfuerzo y sacrificio no tan sólo de los sectores de mayores ingresos, que deben aportar de manera proporcional a sus posibilidades, “hasta que duela”, como ha sostenido el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, sino también del gobierno, a quién le corresponde liderar este esfuerzo, superando sus propias debilidades y conflictos ideológico. A los partidos políticos, que deben superar el preocupante proceso de fragmentación y divisiones internas, re estableciendo relaciones de diálogo y colaboración con los actores sociales, incorporándolos como los verdaderos protagonistas de los cambios. Así como de las propias organizaciones sociales, que deben mantenerse en estado de alerta y movilización pacífica para asegurar la irreversibilidad de este proceso, separando aguas y aislando a sectores violentistas.

Aún el país enfrenta el complejo desafío no tan sólo de reconstrucción de lo dañado tras estos casi dos meses de violencia, reparar nuestra imagen internacional severamente afectado por la crisis y retomar la senda del crecimiento.

De igual manera, se requiere investigar acuciosamente las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas por instituciones nacionales e internacionales vinculadas a su defensa, para impartir justicia y reparación para las víctimas.

De la misma manera se requiere reformar los servicios policiales y de inteligencia, adaptando sus protocolos y formación profesional a estrictas normas democráticas e respeto integral a los Derechos humanos consagrados por Naciones Unidas.

Necesariamente todos estos esfuerzos deben incluir una decidida política de inclusión de los cientos de miles de jóvenes marginados y excluidos por el sistema, así como un reforzado combate al narco tráfico y el crimen organizado.